
LA RECOMPOSICION DEL ORDEN: ELECCIONES EN CENTROAMERICA

Edelberto Torres-Rivas

RESUMEN. En el seno de diez años de guerra civil, violencia política y profundo malestar social causado por la crisis económica, se han producido en la región centroamericana procesos electorales. Por primera vez, *todos* los resultados de estos procesos han sido aceptados como legítimos, abriéndose así, con dificultades, espacios para la competencia partidaria y la organización popular. Pese al reducido tamaño geográfico, las experiencias no tienen ningún parecido entre sí. En Costa Rica, en un extremo, existe desde hace más de medio siglo una democracia política. En Nicaragua se intentó crear una democracia participativa, pero el esfuerzo se frustró por la intervención norteamericana. En Guatemala y El Salvador, la tradición de violencia política convive con una democracia electoral extremadamente débil. Las elecciones han servido para redefinir las relaciones entre los grupos dominantes, el Ejército y la sociedad.

1. *Introducción*

En el transcurso de la crisis política que se produjo tan profundamente en tres de los cinco países de Centroamérica en la década de los ochenta, y sin duda como un resultado hasta ahora no suficientemente estudiado de esta crisis, se abrieron procesos electorales en todos los países de la región. Existe, sin duda, una visible relación genética entre la naturaleza y las modalidades que fue adoptando la crisis en cada país y la diversa utilidad que han venido desempeñando los actos electorales. Resulta contradictorio o al menos curioso, no obstante, que en ningún momento el problema sustantivo de la democracia, sus fundamentos y posibilidades históricas hayan sido asumidos públicamente por sus patrocinadores.

Tal como se plantearon en el inicio de la década, los mecanismos electorales pueden servir tanto para un barrido como para un fregado, según lo determinen las razones estratégicas de sus convocatorias, la amplitud de respuesta de las fuerzas políticas involucradas y, obviamente, la utilidad de sus resultados. En relación a esto último y por la importancia que tiene en la explicación histórica en esta región, no es posible subestimar la política exterior norteamericana, pues por lo menos en cuatro de los casos bajo análisis —El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua— la presencia norteamericana fue un factor decisivo y ubicuo. Sin duda, una estrategia de esa magnitud se apoyó en factores locales preexistentes, a la espera o en busca de una oportunidad. Ha sido justamente el lenguaje oficial de la política exterior extranjera lo que identifica elecciones con democracia. Y con base en esa identificación simplista y falsa se empezó a hablar de «transición a la democracia».

No deja de ser contradictorio que, en el seno de la mayor crisis social de su historia, se hayan realizado en Centroamérica *dieciocho elecciones* en la década de los ochenta (incluyendo los tres primeros meses de 1990). Todas ellas con un variable pero cierto sentido de la competencia partidaria, con participación ciudadana y resultados en los que por vez primera nadie, ni los perdedores, alegaron fraude. Las elecciones fueron de diverso tipo: presidenciales, parlamentarias, municipales; ninguno de sus resultados produjo malestar o inestabilidad, y en todas ellas ganaron los partidos de oposición. Es importante, al intentar explicar estos fenómenos que trascienden lo meramente electoral, distinguir dos conjuntos de situaciones nacionales, definidas por ciertas semejanzas en la tradición política y en la significación de la experiencia electoral reciente. Así, por un lado, están Nicaragua, El Salvador y Guatemala y, por el otro, Honduras y Costa Rica. Esta clasificación, sin embargo, sólo recuerda ciertos trazos comunes que no son suficientes para entender las diversas experiencias nacionales. Los tres primeros tienen en común la crisis política y la violencia y la realización de elecciones en contextos excepcionales. Los dos últimos sólo comparten la ausencia de guerra civil y el bipartidismo. En todo esto se ve que las elecciones no explican los problemas del contexto en que se producen, sino a la inversa. Una vez explicado este contexto, nos proponemos en forma sumaria examinar el fenómeno electoral en su conjunto, y especialmente los resultados de las consultas habidas en los últimos dieciocho meses (1989-marzo 1990).

2. *El contexto crítico*

En la década de los ochenta hubo guerra civil en El Salvador y Nicaragua, y una sorda pero aguda aplicación del terror político en Guatemala. Es ya evidente que la crisis fue un rechazo del orden existente expresado

en un amplio movimiento de protesta que alcanzó una dimensión violenta de lucha armada. Esta no es la simple acumulación no resuelta de problemas socioeconómicos, donde la miseria de las masas es el dato visible. Hubo siempre en el descontento y en la crítica al orden tradicional una demanda democrática nunca satisfecha. Un fracaso reiterado de las propuestas democrático-gradualistas. Las fuerzas políticas dominantes (a las que se ha llamado oligarquía más por su estilo de dominar que por las raíces económicas de su supremacía política) no demostraron ninguna aptitud para crear o fortalecer instituciones políticas democráticas. El golpe de Estado y la intervención militar en el gobierno fueron procedimiento y resultado de aquella voluntad autoritaria. En El Salvador, los militares ejercieron directamente el control desde 1932 hasta 1979; en Guatemala, desde 1920, salvo un breve período (1944-54), hasta 1983, y en Nicaragua, desde 1937, con el ascenso de la familia Somoza, hasta 1979, cuando triunfan los sandinistas.

La crisis política y la insurgencia armada tuvieron diversos encaminamientos que resulta difícil analizar aquí. Basta recordar brevemente lo que ocurrió en esas tres sociedades en el comienzo de los ochenta, por cuanto en las tres han ocurrido novedades que tienen que ver con el desorden electoral actual:

a) En El Salvador, en septiembre de 1979 se produjo, literalmente hablando, una evidente crisis orgánica en la tradicional relación civil-militar, y más evidente aún en el interior de cada uno de esos bloques. El resultado de esta desagregación radical de la vieja alianza dominante fue la constitución de un poder provisional, *de facto*, entre civiles demócrata-cristianos y una generación de oficiales, jóvenes pero no por ello distintos. A su vez, en los sectores populares la insurgencia armada cobró forma y presencia nacional al constituirse el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En el transcurso de toda la década, el país ha vivido una guerra civil que cuesta más de 120.000 muertos y el desplazamiento de más de medio millón de personas. Una abierta represión política contra la población civil ha acompañado la guerra.

b) En Guatemala, el ejercicio del gobierno por parte de los militares también entró en crisis al descomponerse sus relaciones con los grupos empresariales (y los partidos políticos), la Iglesia y otras fuerzas políticas, en marzo de 1982. A diferencia con El Salvador, la crisis de la cúpula en el poder coincide con el mayor momento de fuerza del movimiento guerrillero. Se trata de la insurgencia más antigua, que cobra presencia militar y política, de nuevo, en 1979, y también de la sociedad donde con mayor profundidad se han venido vulnerando los derechos humanos por parte del ejército y otras instituciones del Estado. El enfrentamiento con la insurgencia no llegó a generalizarse como en El Salvador, pero los niveles de violencia contra la población y los grupos organizados legalmente no

tienen paralelo en la historia de América Latina. Durante la década presente han sido asesinadas, han desaparecido o muerto más de cien mil personas. En ambos países, es una fracción del ejército la que da un golpe de fuerza contra otra. Se produce una evidente desavenencia interna y hay pelea sin muertos y, con ejemplar sabiduría, los jefes militares se ponen rápidamente de acuerdo entre sí, trasladando la crisis al mundo de los políticos. La crisis política en Centroamérica, hasta hoy día, no ha afectado la unidad de la institución armada.

c) En Nicaragua, la descomposición del poder exhibe otra faz. Debilitada desde su interior por la presión de una parte de la propia burguesía, acosada militarmente por las insurrecciones urbanas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y abandonada política y diplomáticamente por sus más fuertes aliados, los norteamericanos, la dictadura somocista se desploma en julio de 1979, triunfando así una amplia coalición multiclasista que encabeza el FSLN. Aquí se produce una evidente descomposición del Estado que arrastra al ejército, como su mejor base de apoyo. Desde 1981, el Consejo de Seguridad norteamericano inició la organización de fuerzas irregulares para actuar en el interior de Nicaragua. A partir de 1982, el país experimenta los terribles trastornos de una guerra, llamada de baja intensidad por sus objetivos no militares, que provocó la muerte de más de 60.000 civiles. Estados Unidos minó puertos, embargó el tradicional comercio exterior y congeló todos los préstamos internacionales del país.

Así, entre 1979-82 entran en crisis tanto los arreglos de poder que los grupos dominantes practicaron en un buen trecho de la posguerra, por intermedio de militares apoyados por militares (Guatemala/El Salvador), como la solución dictatorial que encabezó Somoza muchos años atrás. Esa práctica fue dictatorial en una versión atrasada como en Nicaragua; fue simbólicamente democrática en Guatemala y El Salvador, donde candidatos militares participaron en elecciones que nunca perdieron (1970-82 y 1960-79, respectivamente). El voto ciudadano era, en esas condiciones, sólo una manera ritual de formalizar un acuerdo de ganadores previos. En resumen, de la crisis de la cúpula y en un contexto calificado por la violencia política y la crisis económica se montan mecanismos electorales de manera comparativamente rápida, y se empieza a manejar, a contrapelo de lo cotidiano, una llamada apertura democrática como estrategia compatible con la guerra.

3. *¿Por qué elecciones y para qué?*

¿Por qué se ponen en marcha mecanismos electorales en Guatemala, El Salvador y Nicaragua? ¿Es ésta la manera de construir la transición a la democracia? ¿Cuál es la verdadera significación del juego electoral? Las

explicaciones intentadas son diversas e incompletas. Hay sectores de izquierda que atribuyen a la presión de la guerrilla la respuesta electoral como búsqueda de la legitimidad perdida por los gobiernos militares contrainsurgentes, desacreditados por el terror implantado. Un análisis más conservador subrayaría la conveniencia de restituir la división funcional y el orden institucional al Estado, gracias al cual los militares pueden volver ordenadamente a los cuarteles, dejando en manos de los partidos la difícil administración de la crisis. ¿A quién atribuir en esta mayúscula decisión las virtudes democráticas?

La influencia norteamericana, ambigua y por momentos cínica, fue decisiva, sea como cooperación condicionada, como consejo diplomático o abiertamente como expresión de predominio. Ellos «inspiraron» en todas partes algo de la conducta militar y algo del comportamiento de los partidos políticos, en una nueva estrategia para la región: gobiernos civiles salidos de las urnas, rodeando a una Nicaragua antidemocrática; retorno a la constitucionalidad y al Estado de Derecho; gobiernos encabezados por una nueva cohorte política, fuerzas centristas, animadas por programas de reformas modestas; ejércitos disciplinados al poder civil, combatiendo con ayuda norteamericana a la insurgencia guerrillera. ¿Quién podía oponerse? El proyecto pareció aceptable para las fuerzas políticas internas. De hecho, la Democracia Cristiana en El Salvador y Guatemala elaboró esta propuesta desde hacía tiempo y constituía una fresca fuerza política de reemplazo. Su momento llegó cuando Washington decidió que la oportunidad electoral era necesaria. Coincidió, y no por casualidad, con la ola democratizadora que erosionó o abatió los gobiernos autoritarios del Cono Sur. Así, interna y externamente, la estrategia electoral recibió apoyo técnico, simpatía y fuerza moral.

Las tres primeras situaciones tienen semejanzas y diferencias importantes:

i) En El Salvador, la celebración de elecciones libres fue condición norteamericana *sine qua non* para aprobar la ayuda militar que permitiría reconstruir el ejército. Y, con ello, iniciar una estrategia militar para detener al FMLN. La rapidez con que se produjeron tales fenómenos —voto legislativo en Washington a favor de la ayuda, modernización masiva del ejército, ofensivas contra la insurrección popular— hace pensar que las elecciones fueron inicialmente un recurso contrainsurgente. Siendo esto cierto, como explicación no es suficiente; hay otros argumentos, sin duda. Se perseguía, además, el propósito de reconocer la fuerza real, de masas, de los aliados políticos y de reconstituirlos como un centro sólido del espectro político. De las elecciones así condicionadas (además, técnicamente organizadas y financiadas por la AID) surgió la Democracia Cristiana como la primera fuerza política del país (1982) y, además, el *primer presidente civil electo democráticamente en más de medio siglo* (Duarte, 1984). Desde

entonces se han realizado elecciones para diputados y alcaldes (1986 y 1988) y la elección presidencial del 19 de marzo de 1989, ganadas por el partido de la extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista —ARENA—, que conquistó una amplia mayoría y cuya victoria analizamos más adelante.

ii) En Guatemala, la decisión de convocar al retorno a la vida constitucional y restituir a la vida política sus virtudes y riesgos fue hecha por el ejército. Un gobierno militar *de facto* convocó una Asamblea Constituyente y promulgó leyes que organizaron el Tribunal Supremo Electoral, con carácter independiente; el Registro de Ciudadanos, para mejorar las técnicas de inscripción e identidad, y la Ley de Organizaciones Políticas, que estableció requisitos mínimos para la creación de partidos. Ha habido tres procesos electorales: parlamentarias (1984), presidenciales (1985-86) y municipales (1988). Están convocadas nuevas elecciones presidenciales para noviembre de 1990. En los tres eventos, la Democracia Cristiana surgió como la primera fuerza política, pero su victoria y el conjunto de resultados sólo prueban las graves dificultades que tienen que resolverse para construir un sistema político democrático. De hecho, para reconstruir la vida política como alternativa a la violencia. En Guatemala se experimenta un antiparadigma democratizador, pues con la estrategia de entregar el poder a los partidos civiles la coalición autoritaria no retrocede, sino que mantiene su estructura y su lucidez.

Por ello no es imprudente considerar, en vista de las situaciones locales, que, tanto en Guatemala como en El Salvador, los mecanismos electorales puedan constituir un recurso para contribuir a estructurar políticamente las fracturas en el interior de la clase dominante (entre sus fracciones) que han estado presentes en la crisis, así como para restablecer la articulación *dirigente* con el ejército y para dotar de credibilidad un poder que en más de una década, utilizando masivamente recursos de terror, no ha podido resolver el desafío de la insurgencia armada. *La apertura democratizadora aparece como un intento, una forma, de ordenar la sociedad.* Otro problema, no discutido en este momento, lo constituyen las lecciones democráticas o no del acto electoral o si su realización forma parte de una transición democrática. Tenemos serias dudas de que hasta el momento esto esté ocurriendo.

iii) La lucha popular contra la dictadura en Nicaragua tuvo siempre un contenido democrático, y el programa y la práctica sandinista no fue ajena a esa demanda fundamental. Son numerosos los documentos en que el FSLN define la democracia como algo que no se mide en el terreno político ni se reduce a elecciones. Democracia significa participación organizada en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. No obstante, menos que las necesidades internas, la influencia internacional empujó

las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de 1984, que fueron ganadas por el FSLN frente a una oposición dividida, una parte que optó por la guerra mercenaria y otra que simplemente reprodujo los viejos odios partidarios del pasado. Entre estas elecciones y las de 1990 se produjeron cambios importantes en el interior del país. El proyecto de democracia participativa sandinista se fue convirtiendo en un intento de democracia representativa.

iv) Fue Honduras el primer país que, en la década de los ochenta, inicia su proceso de democratización por la vía autoritaria. Aquí, donde los militares también ocupaban —*de facto*— el poder, se comprometen a aceptar el resultado electoral, dando inicio así a una década durante la cual se han realizado elecciones libres en cuatro ocasiones: para parlamentarios (Asamblea Constituyente), en 1980, y para tres presidenciales, en 1981, 1985 y 1989. Varias circunstancias sorprendentes acompañan esta democratización a disgusto. El general Paz García, jefe del gobierno, acepta previamente los resultados electorales de esa misma semana (abril 1980) ante el señor William Bowder, secretario asistente para Asuntos Interamericanos, a cambio de una masiva ayuda técnica y financiera que es ofrecida para modernizar el ejército, particularmente la aviación, y para construir dos bases militares. El ejército hondureño se compromete en una nueva estrategia militar y política en Centroamérica, planteada a raíz de la llegada sandinista al poder. La libertad electoral pone a prueba la solidez del bipartidismo hondureño, en el que los liberales ganaron las tres primeras elecciones en el seno de una crisis provocada por la fuerza del viejo caudillismo rural. Ni la violencia partidaria ni la violación de los derechos humanos están ausentes en Honduras, pero nunca es comparable al horror sistemático de Guatemala y El Salvador. Las elecciones de noviembre de 1989 fueron ganadas de manera abrumadora por el candidato opositor del Partido Nacional.

v) Finalmente, en Costa Rica la historia es otra. Se experimenta desde la década de los cincuenta una vida democrática en el sentido de parecerse, *ceteris paribus*, al modelo norteamericano, que es capaz de combinar la libertad política con un régimen que se preocupa por los niveles de vida de la población. No se afirma con esto ni la inexistencia de profundas desigualdades ni una eficaz administración estatal. Pero esa combinación produce una aceptación mayoritaria de las reglas del juego político, del que las elecciones constituyen un ejemplo y una culminación. Esto se apoya en la fuerza de una cultura democrática. Pero hoy día la mejor fórmula para asegurar este *consenso básico* es, por un lado, el bipartidismo y, por el otro, un claro predominio de uno de los partidos, el partido Liberación Nacional, que tuvo en sus orígenes inspiración socialdemócrata. Las elecciones de febrero de 1990, como en toda la región, las ganó de forma con-

tundente el partido de oposición, el Partido de Unidad Socialcristiana (PUSC).

4. *La política como necesidad*

En los tiempos que corren parece restituirse la dinámica propia de la política. En este intento por comprender este período de la historia centroamericana, la política constituye no la continuación de la guerra por otros medios, sino su radical negación. La política niega la violencia porque la sustituye por la competencia legal. Hacer política es aceptar las reglas de competencia, que definen de manera distinta el papel de los contendientes, la naturaleza de la victoria y el destino de los perdedores. La lógica de la guerra es otra, y lo anormal es que hayan podido compatibilizarse. Recordemos de nuevo que, en la década de los ochenta, la defensa del orden político se hizo en algunos casos empujando la sociedad a la guerra civil. A su vez, el descontento adoptó en otros la estrategia de la lucha revolucionaria por el poder. Cuando la revolución triunfa aparece la guerra contrarrevolucionaria. Y, todo esto, en medio de una crisis económica profunda y duradera que vuelve mayor el desafío democrático.

Si es cierto que la política es un juego competitivo para acercarse al poder —toda política es ejercicio de poder, buscado o defendido—, sólo la democracia es capaz de regular los condicionamientos institucionales, legales, para que ese movimiento de aproximación se realice pacíficamente. En esa movilización participa la mayoría ciudadana, sin riesgos. Lo autoritario en la experiencia centroamericana es la desmovilización forzada, es el trecho insalvable que media entre los que mandan porque creen hacerlo por derecho propio y los que, desintegrados, desorganizados, apaleados, obedecen. No puede dejar de considerarse como un *comienzo*, un buen comienzo en el proceso largo y difícil del regreso a la política, a la competencia civil, la realización de este importante número de actos electorales. Un primer paso, en sociedades donde la violencia impone su dinámica, para acortar esa *distancia*, inaugurar con todas sus deficiencias una de las tantas formas de participación política, para empezar a restituir a la conciencia ciudadana la sensación de construir la legitimidad del poder.

En la última ronda de elecciones en Centroamérica ha surgido una nueva derecha política victoriosa. Las derrotadas, en este caso, son fuerzas centristas, ya que la izquierda no existe para asuntos electorales en Honduras y Costa Rica y se mueve en el terreno insurreccional en El Salvador y Guatemala. Hay que recordar, una vez más, que la violencia estatal destruyó en Guatemala y El Salvador el centro político y, de hecho, desestructuró todas las fuerzas partidarias. Sólo el ejército mantuvo y acrecentó su presencia. En sociedades donde no hubo violencia —Honduras—, los partidos políticos recuperan más plenamente sus funciones. Pero es super-

ficial afirmar que se produjo un vuelco conservador en el electorado. En los cinco países ganó la oposición porque el elector, primero, votó *contra* la política gubernamental que los ha empobrecido y, luego, porque no tuvo opciones reales. ¿Cómo se explica el voto de los costarricenses contra un gobierno que construyó 80.000 casas? ¿O el del pueblo salvadoreño que estuvo a favor de los representantes personales de la oligarquía, a la que combaten por otros medios? ¿O el voto de los nicaragüenses derrotando en las urnas un gobierno revolucionario?

El éxito electoral de ARENA es, sobre todo, la derrota de la Democracia Cristiana, manifestación del fracaso del reformismo y de su incapacidad para terminar la guerra. No puede ser entendida como una rechazación de la opinión pública de un país donde se libra una guerra popular única en la historia latinoamericana. Todo esto revela el fondo íntimo que separa las luchas sociales y su lógica de la competencia electoral. Recordemos que las identidades son distintas y las solidaridades que expresan son opuestas. En las luchas sociales predominan los intereses clasistas y se mueven voluntades más orgánicas y permanentes. El acto electoral es cada vez más el resultado de una operación manipuladora. No un instrumento de convicción ideológica, sino un acto de *marketing*. El voto a favor de la UNO, en Nicaragua, tiene que ser visto, como en El Salvador, en la dimensión trágica de una sociedad arrastrada a la guerra civil. En situaciones de crisis social prolongada, el voto, la escogencia, está determinada por la desesperación inmediata. Frente al caos social se elige por la seguridad y el orden. Los resultados estaban prefigurados, pero ocultos por la vigorosa retórica revolucionaria. El proceso revolucionario mantuvo en los hechos un carácter ambiguo que deberá ser analizado cuidadosamente en otro momento. Y que se venía enredando en la descomposición profunda de la economía y de la guerra. Los contenidos de clase de la política económica sandinista a partir de 1988 fueron claramente antipopulares. El deterioro socioeconómico fue paralelo a las concesiones políticas que la dirección revolucionaria fue paulatinamente haciendo. El voto a favor de la señora Chamorro y la UNO no liquidó la revolución. Fue, en todo caso, el tiro de gracia.

Por detrás del escenario, donde el elector desempeñó su papel momentáneo, aislado e individual, de ciudadano, hay fuerzas sociales redefiniendo no sólo el terreno acotado de la política, sino las nuevas condiciones en que deberá transcurrir la vida centroamericana. En otras palabras, los procesos electorales forman parte de un parteaguas histórico. En el comienzo de la década de los noventa son varios los elementos de la nueva situación, que señalamos rápidamente para entender el sentido del proceso electoral, que utilizamos como eje analítico.

En *primer lugar*, la crisis y violencia fortaleció económica y políticamente a las fuerzas del capital, concentrando aún más la riqueza y modernizan-

do (relativamente) el sector privado. No sabemos si hoy día todavía puede utilizarse la clasificación decimonónica de derechas o izquierdas. En todo caso, los empresarios han empezado a hacer política directamente. Los partidos que ganaron las elecciones en El Salvador, Honduras y Costa Rica en los últimos doce meses están encabezados, conformaron un gabinete ministerial y tienen en su grupo parlamentario a numerosos empresarios jóvenes salidos directamente no del partido, sino de la Cámara o del gremio patronal. Esta generación de ejecutivos y gerentes, militantes *directos* de la política partidaria, es vista como la aparición de una nueva derecha: pragmática, desideologizada, pronorteamericana, negociadora y, posiblemente, eficaz.

En *segundo lugar*, la crisis y la violencia empobrecieron brutalmente a la población, que ya lo era, ampliando su magnitud demográfica y transformando los centros urbanos en receptorio de la marginalidad social y la informalidad económica. La participación electoral tiene para esta masa popular, sin duda, un atractivo simbólico, una cierta magia cívica, porque los movilizó, bajo el impacto de una propaganda millonaria. No debería olvidarse, sin embargo, que la subordinación de las clases populares tiene una base socioeconómica y que la participación electoral disimula en la dimensión política esa condición subalterna, para elevarlo al reconocimiento abstracto de una ciudadanía igualitaria. Además, en dos de estas sociedades impera una cultura del miedo. El indígena guatemalteco del altiplano, que vive en un ambiente de horror, vota pero no elige. La conclusión primaria, elemental, para entender la conducta electoral popular es que, aun bajo experiencias distintas —de tolerancia o terror, desempleados o con ingresos decrecientes—, han expresado un profundo malestar ante la falta de seguridad en su vida presente. Y constituyen una enorme franja de descontento social con potencialidad disruptiva.

En *tercer lugar*, presenciamos el fin de un ciclo de estrategias de cambio por medio de revoluciones violentas. Es el fin del voluntarismo político que se apoyó en el uso de la fuerza y en el descontento efectivo de las masas. Frente a las determinaciones objetivas del presente, el agotamiento de las energías revolucionarias debe corresponder al fin del período de atropello reiterado a los derechos humanos por parte del ejército, otras instituciones y grupos privados. Ni la violencia revolucionaria ni la estatal resolvieron los problemas que están en el origen de la crisis ni ordenaron de forma superior la sociedad centroamericana. En otras palabras, las señales evidentes de este agotamiento empiezan a percibirse en los resultados de la ofensiva urbana de noviembre, del FMLN, en El Salvador, que conducen forzosamente a la negociación. El resultado electoral en Nicaragua y el clima que rodeó la entrega del poder a la oposición por parte de Ortega. Las negociaciones de los guatemaltecos, los más rijosos contendientes de la región. Y, finalmente, la necesidad de desmilitarizar la políti-

ca, reducir los gastos del ejército y devolver a un Estado de Derecho su monopolio del uso civilizado de la *violencia legítima*.

Aún es difícil la construcción de grandes acuerdos básicos, consensos elementales pero apoyados en el valor universal de la democracia política y la justicia social. El punto de partida tiene que ser, cualquiera que sea el precio, el respeto total a los derechos humanos.

NOTAS DE INVESTIGACION